

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500820180053701
Proceso:	Ordinario
Demandante:	JOHN JAIRO FRANCO VANEGAS
Demandado:	COLPENSIONES
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	17/02/2023
Decisión:	REVOCA Y CONDENA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 20/02/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	JOHN JAIRO FRANCO VANEGAS
DEMANDADA	COLPENSIONES
ORIGEN	Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001 31 05 008 2018 00537 01
TEMAS	Pensión de invalidez
CONOCIMIENTO	Apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO SALAS FERNANDO RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art.13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JOHN JAIRO FRANCO VANEGAS contra COLPENSIONES.

En atención al memorial aportado el 22 de noviembre de 2023¹ y a la escritura pública N°716 del 15 de julio de 2020 de la Notaría Novena del Círculo de Bogotá, se reconoce personería para representar los intereses de Colpensiones, como apoderada principal a la sociedad Palacio Consultores S.A.S. identificada con NIT.900.104.844-1. Asimismo, se reconoce personería para representar a dicha entidad como apoderada sustituta a la abogada Leidy Verónica González López, identificada con la CC 44.006.250 y portadora de la TP 196.444 del C. S de la J. Se entienden revocados los poderes y sustituciones anteriores que hubiese aportado la entidad.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda²

El señor John Jairo Franco Vanegas formula demanda contra Colpensiones, pretendiendo se condene a esta última a reconocer y pagar **i)** la pensión de invalidez de

¹ 02SegundaInstancia; 05AlegatosColpensionesSustitucion.pdf

² 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, págs. 5/8

origen común a partir del 18 de junio de 2016, fecha de estructuración, o desde el momento en que completó 50 semanas mínimas de cotización que se exigen para ser acreedor de la misma; **ii)** los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales adeudadas hasta el día en que se haga efectivo el pago de la obligación; o en subsidio; **iii)** la indexación; **iv)** costas y agencias en derecho y; **v)** lo ultra y extra petita.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 7 de julio de 1963, ha estado afiliado al sistema de seguridad social en pensiones a través de extinto Instituto de Seguros Sociales. Manifiesta que, debido a sus quebrantos de salud, fue evaluado por Medicina Laboral de Colpensiones el 2 de marzo de 2018, otorgándole una pérdida de capacidad laboral del 54.79% de origen común, y con una fecha de estructuración del 18 de junio de 2018, por lo cual elevó solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez ante la AFP el día 17 de mayo de 2018, la cual fue negada mediante Resolución SUB205409 del 1º de agosto del mismo año, argumentando que el actor no contaba con la densidad de semanas necesarias para acceder a la misma.

Manifiesta que si bien dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración del estado de invalidez no cotizó las 50 semanas que exige la Ley 860 de 2003 para acceder a la pensión de invalidez, señala que, la Corte Constitucional ha establecido la posibilidad de adicionar semanas anteriores con las cotizadas en forma posterior a la estructuración de la invalidez, cuando la pérdida de capacidad laboral se atribuye a una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, si es que se conservan aptitudes para ofrecer sus servicios laborales; así el actor entre agosto de 2016 y febrero de 2018 cotizó 350 días al sistema pensional.

Finalmente aduce que el retardo en el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común, lo hace acreedor de los intereses moratorios o de la indexación.

Oposición a las pretensiones de la demanda:

Colpensiones³ Se opuso oportunamente a todas las pretensiones instauradas en su contra, por no acreditar el actor cotizaciones de 50 semanas o más entre el 18 de junio de 2013 y el 18 de junio de 2016, fecha esta última de la estructuración de invalidez. Excepcionó: inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de invalidez, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas e intereses moratorios de manera simultánea, prescripción, compensación e, imposibilidad de condena en costas.

Sentencia de primera instancia⁴

El 28 de mayo de 2019, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia absolviendo a la demandada de todas y cada una de las pretensiones impetradas por el señor John Jairo Franco Vanegas. Condenó en costas a la parte demandante, fijando como agencias en derecho un valor de \$828.116

³ 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, págs. 38/45

⁴ 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, págs. 62/63

Para fundamentar lo decidido, la juez de instancia señaló que el actor ostenta una PCL del 54.79% con fecha de estructuración del 18 de junio de 2016, siendo aplicable a él la Ley 860 de 2003 para el reconocimiento prestacional, que exige acreditar 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de invalidez, y visto que cotizó de la totalidad de 315.57 semanas entre el 8 de septiembre de 1982 y el 31 de enero de 2018, sin que 50 de ellas lo fueran dentro de los 3 años anteriores a la FE no le asiste derecho al reconocimiento prestacional.

Procedió entonces a estudiar la pretensión subsidiaria de reconocimiento de la pensión desde la fecha en que se acreditaron las 50 semanas de cotización, refiriendo a que la H. Corte Constitucional en sede de tutela ha determinado la posibilidad de contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez y luego de la calificación de la pérdida de capacidad laboral cuando se trata de la situación particular de pacientes con enfermedades crónicas o degenerativas en quienes se presenta un deterioro paulatino de la salud, que eventualmente les permite permanecer activos laboralmente aun luego de la fecha de estructuración fijada en el dictamen, con todo lo anterior, aduce que, no sería procedente darle el tratamiento excepcional que se ha utilizado para las enfermedades congénitas, degenerativas y crónicas que significaría la posibilidad de tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración, puesto que en el dictamen de pérdida de capacidad laboral allegada al plenario no se indica en ninguno de sus apartes que la enfermedad que padece el actor haya sido catalogada como una enfermedad de estas índole.

Por último, aduce que para que se cause el derecho a la pensión de invalidez, la pérdida de la capacidad laboral se tuvo que haber producido luego de haberse aportado al régimen respectivo un determinado número de semanas, por lo tanto, la invalidez preexistente al momento de la afiliación o la producida durante un determinado tiempo en que se haya dejado de cotizar previsto legalmente no da derecho a la pensión de invalidez por riesgo común

Recurso de apelación:

Inconforme con lo decidido la parte demandante presentó recurso de alzada argumentando que:

i) De conformidad con las sentencias T-072 del 2013, T-143 del 2013, T-057 del 2017 emanadas de la H. Corte Constitucional, es posible adicionar a las semanas cotizadas con anterioridad a la FE las cotizadas posteriormente, así fuese con anterioridad al dictamen de PCL, en aquellos eventos que se padezca de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, tal y como es el caso del demandante, que su fuerza se desvanece paulatinamente, y por ello la fecha en que efectivamente pierde su capacidad laboral es diferente a la FE.

En tal sentido, el demandante cuenta con los requisitos para que la prestación sea concedida, puesto que sus enfermedades son *epilepsia tipo no especificado y otros trastornos de ansiedad especificados que son alteración de la consciencia por pérdidas*

consciencia episódicas por trastornos del sueño y vigilia debida a alteraciones mentales, cognitivas y de la función integradora y por afasia o disfasia, tal y como lo dice el dictamen emitido por Colpensiones el 2 de marzo de 2018.

ii) Finalmente, solicita que, de no acoger el recurso de apelación, se tenga en cuenta que el demandante está subsidiado por el régimen de Colombia Mayor y no tiene mayores recursos, y por lo tanto, no sea condenado en costas.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Una vez corrido el traslado para alegar en esta instancia, ambas partes lo recorrieron de forma oportuna, así:

i) **Demandante**⁵ deprecia se revoque la sentencia de instancia, reiterando los argumentos expuestos en el líbello introductor, adicionando que el padecimiento de epilepsia del demandante, es una enfermedad neurológica crónica, de causas diversas, caracterizada por crisis recurrentes, siendo el deterioro cognitivo del actor muy severo, en razón a que padece lagunas mentales, que han incrementado con el paso de los años, por lo que no se acoge lo esgrimido por la falladora de instancia.

ii) **Colpensiones**⁶, solicita se confirme la sentencia de instancia argumentando que pese a la pérdida de capacidad laboral del demandante, ninguna de las patologías descritas en el dictamen son degenerativas pro lo que no es viable estudiar la prestación desde esa perspectiva.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, es decir, en consonancia con los puntos que fueron objeto de apelación.

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la demandada, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se centra en determinar **a)** la procedencia o no del reconocimiento de pensión de invalidez. En caso afirmativo, se definirá **b)** el momento a partir del cual se causó el disfrute y si hay lugar a la indexación de la condena.

Hechos relevantes acreditados documentalmente

- John Jairo Franco Vanegas nació el 7 de julio de 1963⁷.

⁵ 02SegundaInstancia; 04alegatosDemandante0820180537.pdf

⁶ 02SegundaInstancia, 05AlegatoscolpensionesSustitucion0820180537.pdf

⁷ 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, pág. 29. No se aportó copia del registro civil de nacimiento, pero obra copia de la cédula de ciudadanía del demandante que refiere dicha fecha, la cual no fue objetada por la pasiva.

- John Jairo Franco Vanegas acredita 335.43 semanas de cotización ante el Sistema General de Pensiones, a través de Colpensiones, entre el 8 de septiembre de 1982 y el 30 de agosto de 2018⁸.

- El 2 de marzo de 2018, Colpensiones emitió dictamen de calificación al señor Franco Vanegas, concluyendo que presenta pérdida de capacidad laboral del 54.79%, estructurada el 18 de junio de 2016⁹, la cual fue notificada el 10 de marzo del 2018.

- Colpensiones mediante Resolución SUB 205409 del 1° de agosto de 2018, negó la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez elevada por el demandante el 17 de mayo del mismo año¹⁰, por no acreditar las 50 semanas de cotización exigidas, dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de invalidez.

a) Procedencia del reconocimiento de la pensión de invalidez

Por regla general, tal prestación se regula por la norma que esté vigente a la fecha de estructuración de la PCL.

En el caso **no está en discusión**, **(i)** la naturaleza de la PCL, ambas partes coinciden en que es común; **(ii)** ni que dicha PCL asciende al 54.79%; **(iii)** tampoco lo está la fecha de su estructuración, 18 de junio de 2016, establecida mediante dictamen del 2 de marzo de 2018 por Medicina Laboral de Colpensiones; **(iv)** ni que el demandante no cuenta con 50 semanas de cotización con anterioridad a la fecha de estructuración como lo exige la Ley 860 de 2003, aplicable a su caso por ser la vigente al momento de configuración de la contingencia, pues la última cotización anterior a la calificación fue de julio de 2003.

Por lo anterior, deprecia el actor que se realice el estudio de la prestación de invalidez bajo los antecedentes jurisprudenciales que permiten tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la Fecha de Estructuración, así fuese con anterioridad al dictamen de pérdida laboral, en casos en los que el afiliado padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, lo cual afirma es su caso, al contar con diagnóstico de epilepsia que es una enfermedad cerebral crónica, que ha implicado que su fuerza laboral se deteriore paulatinamente.

Negó la Juez A Quo la prestación bajo esta dimensión, argumentando que los padecimientos del actor que fueron objeto de calificación de su PCL no están establecidos como de dicha índole.

En virtud de lo anterior, se adentrará la Sala en el estudio de la prestación económica bajo la perspectiva de capacidad laboral residual, para lo cual se analizará si los

⁸ 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, pág. 46/51, se valora la HL aportada por Colpensiones por estar más actualizada que la visible en págs. 24/28, y acreditar una densidad mayor de semanas.

⁹ 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, pág. 12/18

¹⁰ 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, pág. 19-23

diagnósticos del actor en efecto están catalogados como crónicos, degenerativos o congénitos.

a) Capacidad laboral residual¹¹

Si bien la regla general es la expuesta en precedencia, conforme a la cual, la norma aplicable para decidir sobre la causación de una pensión de invalidez es la vigente al momento de la estructuración de la PCL; no es menos cierto que la jurisprudencia ha decantado que cuando se trata de afiliados que han sido diagnosticados con enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas, la regla varía, pues se debe establecer en cada caso, si las semanas que se cotizan con posterioridad a la estructuración de la PCL son válidas, al haberse presentado en razón de una actividad que pudo desarrollar con ocasión de una capacidad laboral residual¹².

Ha expresado la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia que *“en el caso de enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas, no siempre se presenta una coincidencia entre la fecha en que se entiende estructurada la invalidez de una persona con el momento en que ésta pierde definitivamente su capacidad laboral, dado el carácter especial y progresivo que caracteriza a este tipo de patologías”*¹³.

En sentencia **SU 556 de 2018**, la H. Corte Constitucional afirmó... *“pese a las condiciones de la enfermedad, la persona pudo desempeñar una labor y, en esa medida, desechando las semanas aportadas con posterioridad al momento asignado en la calificación. Además, negar el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez, con fundamento en lo anterior, implicaría asumir que las personas en situación de discapacidad, en razón de su estado de salud, no pueden ejercer una profesión u oficio que les permita garantizarse una vida en condiciones de dignidad y que, en esa medida, nunca podrán aspirar a un derecho pensional, postulado que a todas luces es violatorio de tratados internacionales, inconstitucional y discriminatorio”*

En ese sentido, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencias como la de radicado **77459 del 14 de agosto de 2019**, ha expresado:

“...los padecimientos crónicos de larga duración son permanentes en el tiempo y se agravan de manera paulatina, lo cual, eventualmente, permite al paciente continuar con su actividad de trabajo, pese a que la pérdida de capacidad laboral se haya estructurado desde antes.

En palabras de la Corte Constitucional, aunque la discapacidad en estas enfermedades se puede estructurar en determinada fecha, la persona puede mantener una capacidad residual de trabajo que le permite continuar activa

¹¹ Posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, pese a las consecuencias de la enfermedad” (SU 588/16). “Consiste en la posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas y, en tal medida, esa situación no puede ser desconocida” (Rad.77459/19 CSJ)

¹² Pueden verse entre otras, las sentencias SL3275-2019, SL1002-2020, SL198-2021, y SL4321 de 2021.

¹³ Sentencia SL 5556 de 2021

laboralmente, con la respectiva obligación de realizar los aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte que ofrece el sistema, los que resultan plenamente válidos y con los cuales puede alcanzar el reconocimiento de una pensión, pues de lo contrario, se desconocerían los aportes realizados «en ejercicio de una efectiva y probada, explotación de una capacidad laboral residual»».

...

“Ahora bien, en aras de evitar el fraude al sistema general de pensiones y, a su vez, garantizar su sostenibilidad fiscal, es necesario, en cada caso, ponderar varias aristas del asunto a dilucidar, tales como el dictamen médico, las condiciones específicas del solicitante, la patología padecida, su historia laboral, entre otras, pues precisamente en razón a que el afiliado puede trabajar y, producto de ello, cotizar al sistema durante el tiempo que su condición se lo permita, es necesario corroborar si los aportes realizados se hicieron con la única finalidad de acreditar las semanas exigidas por la norma o si, por el contrario, existe un número importante de ellos resultantes de una actividad laboral efectivamente ejercida”.

Sobre la fecha que debe tomarse como punto de partida para contabilizar las semanas de cotización con miras a determinar la causación de la pensión de invalidez en estos casos, se ha dicho que esta obedece a **i)** el momento en que se efectúa el dictamen de pérdida de capacidad laboral; **ii)** la fecha en que se solicita la prestación por invalidez o; **iii)** el último ciclo cotizado, cuando es evidente la existencia de una capacidad laboral remanente¹⁴.

En el asunto bajo examen de la Sala se tiene que el ente calificador de PCL del actor, tuvo en cuenta 3 diagnósticos para emitir su dictamen, a saber: *EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO; OTROS TRANSTORNOS DE ANSIEDAD ESPECIFICADOS* e *HIPERTENSIÓN ESENCIAL*¹⁵.

Pues bien, la *EPILEPSIA* acorde al Ministerio de Salud¹⁶, es un síndrome cerebral crónico, caracterizado por crisis recurrentes, que se repiten en el tiempo, autolimitadas, de causa variada, con manifestaciones clínicas diversa,

Conforme a lo anterior, y contrario a lo concluido por la A Quo, al padecer el demandante de Epilepsia, **enfermedad cerebral catalogada como crónica**, y presentar cotizaciones posteriores a la estructuración de su PCL - del 18 de junio de 2016 al 30 de agosto de 2018¹⁷.-, es pertinente analizar la situación del demandante a la luz de su capacidad laboral residual.

Pues bien, de las cotizaciones realizadas por el demandante según se observa en la documental allegada devienen para los ciclos de agosto a noviembre de 2016 de un

¹⁴ Sentencias SL781 de 2021, SL4329 de 2021 y SL5556 de 2021, entre otras.

¹⁵ 01PrimerInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, pág. 12/18

¹⁶ Información obtenida de las siguientes páginas autorizadas: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Epilepsia-mucho-mas-que-convulsiones.aspx> y <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/abece-epilepsia.pdf>

¹⁷ 01PrimerInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, pág. 46/51, se valora la HL aportada por Colpensiones por estar más actualizada que la visible en págs. 24/28, y acreditar una densidad mayor de semanas.

empleador particular, para los ciclos de febrero y marzo de 2017 como trabajador independiente, y para los ciclos de abril de 2017 al de agosto de 2018 del régimen subsidiado, y dado que éste al ser interrogado por la Juez A Quo en primera instancia sobre el último empleo que tuvo, este indicó que *“trabajando en la calle barriendo, en el 2003, o sea, de aseo”*, advirtiendo que desde ese momento no ha laborado por ninguna empresa y que no se encontraba laborando en la actualidad, se hace necesario verificar la validez de las cotizaciones realizadas a partir de agosto de 2016.

Respecto de los ciclos de agosto a noviembre de 2016, se tiene que fueron cotizados a través de empleador bajo nombre *“ANGELA MARÍA RIVILLAS ARANGO”* sin que obre observación alguna por parte de Colpensiones, siendo recibida plenamente la cotización por la AFP.

En torno a las cotizaciones realizadas bajo régimen subsidiado, ha de indicarse que a la luz del principio de solidaridad del sistema de seguridad social integral que emana del artículo 1° de la Constitución Política y que se encuentra reflejado en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, entendido como *“la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil”*, deriva en el Estado el deber de garantizar la solidaridad en el régimen de seguridad social mediante su participación, control y dirección, y en virtud de ello se dispuso la creación del fondo de solidaridad pensional con el fin de subsidiar los aportes al régimen general de pensiones¹⁸, y sobre su validez, concluyó la H. Sala Laboral de la CSJ en sentencias como la **SL4528 de 2020**, que **itera la SL843 de 2013** que:

“(…) no existe razón alguna para negar la validez de las semanas cotizadas al régimen subsidiado, hasta tanto se cumplan los requisitos necesarios (edad y tiempo de servicios o semanas de cotización) para la concesión de la prestación pensional. Así se dijo, por ejemplo, en la sentencia SL843-2013:

[...] de conformidad con el literal i del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en la forma en la que fue modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, “[e]l fondo de solidaridad pensional estará destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como trabajadores independientes o desempleados, artistas, deportistas, madres comunitarias y discapacitados.” En esa misma dirección, el artículo 1 del Decreto 569 de 2004 establece que la “subcuenta de solidaridad destinada a subsidiar los aportes al Régimen General de Pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción.”

Las citadas disposiciones contemplan una posibilidad para que ciertos grupos poblacionales especiales ingresen al Sistema General de Pensiones, y no prevén alguna limitación relacionada con que la cobertura del aporte subsidiado alcance únicamente los riesgos de vejez y muerte, de manera que los de invalidez se encuentren expresamente excluidos, como lo defiende el Instituto de Seguros

¹⁸ Decreto 1127 de 1194.

Sociales.

*En ese sentido es claro el artículo 3 del Decreto 1858 de 1995, al señalar que dentro del Fondo de Solidaridad Pensional, “la selección del régimen pensional es libre y voluntaria por parte del trabajador solicitante e implica la aceptación de las condiciones propias del mismo para acceder a las pensiones de vejez, **invalidez** y sobrevivientes y demás prestaciones económicas a que haya lugar.” (Resaltado no original). Esta norma se encuentra reproducida de igual forma, en el artículo 15 del Decreto 3771 de 2007.”*

Pues bien, aun cuando el demandante manifestó a la juez de instancia, que desde el año 2003 no laboral, lo que en principio permitiría concluir que estas cotizaciones del régimen subsidiado no reflejan una verdadera capacidad laboral residual, por no provenir de una relación laboral, lo cierto es que al realizar un análisis juicioso de los fundamentos de la calificación de PCL realizado por Asalud¹⁹, se desprende la siguiente información:

*“Otras interconsultas/fundamentos Rol laboral/ocupacional: Paciente de 54 años, **laboraba en construcción hasta hace 2 años** con limitaciones para mantenimiento y cuidado de objetos personales, dificultades en su desempeño psicosocial con limitaciones moderadas para la ejecución de los mismos, para su reintegro a la vida laboral, debido a su bajo desempeño y rendimiento, pérdida de memoria requiere tratamiento continuos y permanentes, supervisión de terceros, está en capacidad de manejar dinero.*

Rol laboral: cambio de rol laboral o puesto de trabajo con actividades recortadas”.

Conforme a lo anterior, la Sala da plena credibilidad a las cotizaciones efectuadas por el demandante al régimen subsidiado, por cuanto se desprende que para el momento de la evaluación de PCL -2 de marzo de 2018-, refiere el demandante laborar en el sector de la construcción, que valga resaltar, se caracteriza por su informalidad, y aunado al deterioro de salud del actor en virtud de sus padecimientos que hacen que pierda la memoria, se considera que las mismas se presentan como consecuencia de una actividad personal, por la que se sufragaron con base en los bajos ingresos del afiliado, ante dicho régimen subsidiado.

Tan válidas son las cotizaciones, que Colpensiones hace uso de ellas para el análisis del derecho que no consideró causado, admitiendo en la Resolución SUB 205409 del 1° de agosto de 2018²⁰, que el señor Franco Vanegas, cuenta con 264 semanas cotizadas. Es evidente además que no se cotizaron con miras a defraudar el sistema pensional, pues equivalen 81,42 semanas de cotizaciones, que no permite inferir ilegalidad en la motivación de las cotizaciones, pues de haberse realizado con ánimo el ánimo de defraudar, se habría cotizado un número muy inferior y además cercano a la fecha de la calificación de la PCL.

¹⁹ 01PrimerInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, pág. 15

²⁰ 01PrimerInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, pág. 19-23

Además, en ningún momento Colpensiones se opuso a la legalidad de las cotizaciones, por lo que no encuentra la Sala motivos que ofrezcan duda sobre su idoneidad; incluso, se tomarán como válidamente cotizados los periodos que no fueron tenidos en cuenta por Colpensiones en la historia laboral, correspondientes a los ciclos de mayo, septiembre de 2017, y febrero y septiembre de 2018, pues en el detalle de pagos se evidencia que quien incumplió la carga del porcentaje la cotización que le correspondía fue el Estado, cumpliendo el afiliado con la suya, sin que pueda hacerse responsable a la demandante, de la omisión en que incurrió el Estado. Asimismo, Colpensiones recibió los pagos sin que haya demostrado o siquiera advertido, que hizo devolución de las cotizaciones a la demandante. se adicionan por esta razón a la historia laboral obrante en págs. 46/49, 17,14 semanas.

En el caso bajo examen, se tendrá como fecha de punto de partida para contabilizar las semanas de cotización con miras a determinar la causación de la pensión de invalidez, el último ciclo cotizado, esto es 30 de septiembre de 2018, que corresponde al momento en que el demandante no pudo aportar más al sistema general de pensiones, cuando es evidente la existencia de una capacidad laboral remanente, con lo cual se concluye que John Jairo Franco Vanegas si causó la pensión de invalidez de origen común que reclama, al acreditar más de 50 semanas dentro de los 3 años anteriores, tal y como lo dispone el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, que ascienden a 88.57 semanas.

Por lo hasta aquí expuesto y acreditados los requisitos para acceder a la prestación deprecada por la existencia de capacidad laboral residual, se **REVOCARÁ** la sentencia venida en apelación.

b) Disfrute de la pensión de invalidez

El último inciso del artículo 40 de la Ley 100 de 1993 prevé que:

“La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.”

La Sala avizora que la historia laboral allegada con el escrito de demanda, actualizada al 12 de marzo de 2018²¹, da cuenta de 315,57 semanas cotizadas hasta el 31 de marzo del mismo año, mientras que la aportada por Colpensiones²² con su contestación del 3 de diciembre de ese año, da cuenta de 355,43 semanas cotizadas, reflejando periodos hasta noviembre de 2018, figurando octubre bajo observación “*pago incompleto*”, y noviembre bajo “*pago en proceso en verificación*”.

Así las cosas, el disfrute de la prestación se dispondrá desde el día siguiente a la última cotización efectuada, en que perdió la capacidad laboral residual, esto es, 1° de octubre de 2018.

²¹ 01PrimerInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, págs. 24/28

²² 01PrimerInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, págs. 46/51

La prestación será reconocida en cuantía equivalente a la pensión mínima para cada año, pues de la historia laboral del demandante se desprende que sus cotizaciones se efectuaron sobre un ingreso base de cotización que no superaba el salario mínimo para cada oportunidad. Se pagarán trece (13) mesadas por año, por haberse causado la prestación con posterioridad al 31 de julio de 2011²³.

Colpensiones reconocerá y pagará al hoy demandante la suma de Cincuenta y Dos Millones cuatrocientos Treinta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos (\$52'432.753) por concepto de retroactivo de mesadas de pensión de invalidez, causado entre el 1° de octubre de 2018 y el 28 de febrero de 2023, detallado como aparece a continuación:

AÑO	VALOR MESADA	N° MESADAS	VALOR
2018	\$ 781.242	4	\$ 3.124.968
2019	\$ 828.116	13	\$ 10.765.508
2020	\$ 877.803	13	\$ 11.411.439
2021	\$ 908.526	13	\$ 11.810.838
2022	\$ 1.000.000	13	\$ 13.000.000
2023	\$ 1.160.000	2	\$ 2.320.000
			\$ 52.432.753

La mesada pensional para el año 2023 se continuará pagando en un millón ciento sesenta mil pesos (\$1'160.000)

Del retroactivo pensional que liquide Colpensiones en caso de haberlo, **se autorizará a la demandada que descuenta el valor de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud**, con fundamento en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, y a lo decantado por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en esta materia²⁴,

d) Intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993

El art.141 de la Ley 100 de 1993 dispone que *“a partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”*.

²³ Acto Legislativo 01 de 2005. Art.1 Parágrafo transitorio 6o. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año

²⁴ En las sentencias de SL 1195 del 29 de enero de 2014, radicación 48.918, SL 9782 del 23 de julio de 2014, radicación 54.583; SL 10143 del 30 de julio de 2014, radicación 45.232; SL 13547 del 1 de octubre de 2014 radicación 47.264, entre otras.

El Art. 19 del Decreto 656 de 1994²⁵ autorizó al Gobierno para establecer los plazos de reconocimiento de las Pensiones, sin que, en ningún caso exceda de cuatro meses²⁶. La Corte Constitucional en la sentencia SU-975 de 2003 sentó que debe aplicarse la regla mencionada y como no se dispuso legalmente un plazo diferente para satisfacer esta prestación, por analogía (art 145 del CPTSS), debe entenderse que, en materia de pensión de invalidez, el plazo para su reconocimiento es de cuatro meses contados desde que se eleve la reclamación administrativa, tal y como lo interpreta la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, acogida por esta Corporación de segunda instancia²⁷.

En torno a dicho aspecto se resalta que: (i) la negativa de Colpensiones al reconocimiento de la prestación no fue arbitraria, por fundamentarse en parámetros legales vigentes en la época de reclamación del señor John Jairo Franco Vanegas. (ii) La condena al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, se impuso en atención a la acreditación de capacidad laboral residual, previa aplicación de concepto de naturaleza jurisprudencial, por tanto, no procede condenarla al pago de intereses moratorios.

Sin embargo, para garantizar que el demandante perciba lo adeudado en su real valor, en caso de que exista retroactivo pensional a reconocer, se ordenará indexar la condena; para ello, la demandada tomará la fórmula que ha sido avalada por la H. Corte Suprema de Justicia en la materia:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{V. ACTUALIZADO}$$

Los valores con los que ha de reemplazarse la fórmula deben ser:

El ÍNDICE FINAL certificado por el DANE que corresponde al de la fecha en que haya de efectuarse el pago;

El ÍNDICE INICIAL corresponde a la fecha de exigibilidad de cada mesada pensional, puesto que son prestaciones periódicas.

El VALOR A INDEXAR corresponde al valor de cada reajuste a indexar.

III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por las demandadas han quedado implícitamente resueltas, mereciendo especial pronunciamiento la de prescripción, que no operó, al no haber transcurrido entre la causación de la prestación, - 2 de marzo de 2018 fecha de

²⁵ Decreto declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C-376-95 del 24 de agosto de 1995, Magistrado Ponente, Dr. Jorge Arango Mejía.

²⁶ En este sentido se legisló para la pensión de vejez en el Artículo 9 Parágrafo 1o. Inciso Final de la Ley 797 de 2003.

²⁷ Ver entre otras, la sentencias SL14269 de 2014, SL 2150 de 2017 y SL 1562 de 2019

emisión del dictamen de PCL por parte de Colpensiones²⁸; su reclamación, -17 de mayo de 2018²⁹, y la radicación de la demanda, -13 de septiembre de 2018³⁰-, el periodo de tres años a que refieren los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS.

IV. COSTAS

Costas en ambas instancias a cargo de Colpensiones por haber resultado vencida en el proceso, al salir avante el recurso de apelación formulado por la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 365 del CGP. Se fija como agencias en derecho en esta instancia, el equivalente a 3 SMLMV en 2023.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Revocar la sentencia proferida el 28 de mayo de 2019 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario de doble instancia promovido por JOHN JAIRO FRANCO VANEGAS contra COLPENSIONES.

SEGUNDO: Declarar que John Jairo Franco Vanegas, le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, a cargo de Colpensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 860 de 2006 y en aplicación de su capacidad laboral residual, la cual se causó el 30 de septiembre de 2018, en cuantía equivalente a la pensión mínima legal que para cada año fije el gobierno. Se pagarán trece (13) mesadas al año.

TERCERO: Ordenar a Colpensiones a reconocer y pagar al demandante la suma de Cincuenta y Dos Millones cuatrocientos Treinta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos (\$52'432.753) por concepto de retroactivo de mesadas de pensión de invalidez, causado entre el 1° de octubre de 2018 y el 28 de febrero de 2023, suma que será indexada al momento del pago, como se indicó en la parte motiva de la providencia.

La mesada pensional para el año 2023 se continuará pagando en un millón ciento sesenta mil pesos (\$1'160.000)

²⁸ 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, pág. 18

²⁹ 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, pág. 20

³⁰ 01PrimeraInstancia; 02Expediente0820180537.pdf, pág. 11

De este retroactivo pensional y el que se cause a la fecha del pago de esta sentencia, se autoriza a la demandada que descuente el valor de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud.

CUARTO: Costas en ambas instancias a cargo de Colpensiones. Se tasan las agencias en derecho en esta instancia, en la suma equivalente a 3 SMLMV en 2023.

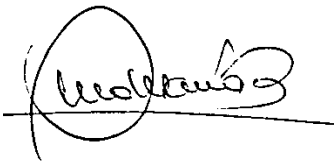
Se ordena notificar lo decidido por Edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN